



San Gil, Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023)

Sentencia No. 56 Radicado 2023-00055-00

Surtido el trámite establecido por el Decreto 2591 de 1991 y estando dentro del término señalado en el artículo 29 ibídem, procede el Despacho a decidir en primera instancia la acción de tutela impetrada por parte del señor **JAIME ENRIQUE CACERES**, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía número 91'071.776, la cual fue presentada en contra de la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, por la presunta vulneración del Derecho Fundamental de Petición; siendo vinculado de manera oficiosa la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL** y el **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT**, en aras de garantizar sus prerrogativas de Defensa y Contradicción.

I. ANTECEDENTES

El precitado ciudadano, promovió acción de tutela en contra de la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, propendiendo por el amparo de su Derecho Primario de Petición, con base en los siguientes,

II. HECHOS

El acontecer fáctico sobre el cual se sustenta el amparo impetrado, se contrae a lo siguiente:

El accionante expuso en el escrito genitor, que el pasado 30 de junio del año en curso, presentó Derecho de Petición ante la Secretaria de Tránsito y Transporte de San Gil (S), tendiente al comparendo Nro. 08001000000031236189, así como peticionado información relacionada con la dirección que se encontraba registrada en el RUNT para el 11 de septiembre de 2021. Del que a la fecha de radicación de la acción tutelar, adujo no haber recibido respuesta alguna.

Aportó como material probatorio lo siguiente:

- Certificado emitido por la entidad AUCO, respecto de la autenticidad de la firma digital correspondiente al señor JAIME ENRIQUE CÁCERES.
- Derecho de petición presentado por el señor JAIME ENRIQUE CÁCERES, ante la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S), donde peticionó, información tendiente a los tramites realizadas ante ese organismo de tránsito, su dirección registrada para el 11 de septiembre de 2021, así como su historial en el RUNT entre otros.
- Remisión electrónica de fecha 30 de junio de 2023, del Derecho de Petición.

III. PETICIONES

Del contenido de la demanda se concluye, que lo pretendido por la parte actora es que se tutele el amparo invocado, y en consecuencia se ordene a la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, disponga la contestación de fondo, clara, precisa y debidamente notificada, al petitorio que data del pasado radicado el pasado 30 de junio de 2023.



IV. ACTUACIÓN PROCESAL

Una vez recibida por reparto virtual, según acta N° 5668 del 03 de agosto de 2023, este Despacho mediante auto de la misma fecha, admitió la acción de tutela impetrada por el señor **JAIME ENRIQUE CACERES**, y en consecuencia ordenó correr traslado de la demanda a la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)** como accionado directo, a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL (S)** y al **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT**, como vinculados de manera oficiosa, para que se pronunciaran acerca de las razones por las cuales, presuntamente no se ha dado respuesta a la petición radicada el 30 de junio del año en curso, así como, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

V. ARGUMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS DE LA ENTIDAD ACCIONADA

ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN GIL

Mediante correo electrónico recibido el pasado 04 de agosto hogaño, la Dra. ADRIANA MARITZA DÍAZ VILLAMIZAR en su calidad de Secretaria Jurídica y de Contratación de la Alcaldía Municipal de San Gil (S), expuso que el Derecho de Petición radicado por el actor ya fue contestado en su totalidad y notificado de manera electrónica, por lo que, no debe prosperar la presente acción de amparo.

Como sustento probatorio anexó:

1. Tarjeta profesional de la Dra. ADRIANA MARITZA DÍAZ VILLAMIZAR emitida por el C.S de la J.
2. Diligencia de posesión de la Dra. ADRIANA MARITZA DÍAZ VILLAMIZAR, como Secretaria Jurídica y de Contratación de la Alcaldía Municipal de San Gil Santander.
3. Decreto Nro. 100-12-139-2022 del 30 de septiembre de 2022, mediante el cual se nombró a la Dra. ADRIANA MARITZA DÍAZ VILLAMIZAR como Secretaria Jurídica y de Contratación.
4. Cedula de ciudadanía de la Dra. ADRIANA MARITZA DÍAZ VILLAMIZAR.

SECRETARIA DE TRANSITO DE SAN GIL SANTANDER

En E-mail de fecha 08 de agosto de 2023, el Dr. JORGE VICENTE SÁNCHEZ BARÓN en su calidad de Secretario de Transito del Municipio de San Gil Santander, manifestó que revisados los sistemas el accionante no se ha recibido solicitudes relacionadas con el comparendo Nro. 08001000000031236189 de fecha 11 de septiembre de 2019, aunado a ello que este no corresponde a su representada.

En el mismo sentido, en razón con la petición presentada por el actor ante el Área de Ventanilla del Organismo de Tránsito Municipal, a la cual se le asignó número de radicado 2310007327 de fecha 30 de junio de 2023, referente a información sobre las direcciones del accionante registradas en el aplicativo RUNT, entre otros, esta fue debidamente resuelta y comunicada mediante oficio Nro. 2330006572 de fecha 08 de agosto de 2023, a la dirección electrónica entidades+LD-329700@juzto.co.

Con ocasión de lo anterior, expuso que a la fecha no se está vulnerando derecho fundamental alguno de la parte activa, por lo que requiere que la presente acción tutelar sea declarada improcedente.

Como sustento material aportó:

1. Derecho de petición radicado Nro. 2310007327, de fecha 30 de junio de 2023.



2. Oficio identificado con número de consecutivo 2014-2023 de 04 de agosto de 2023, referenciado como “ASUNTO: Respuesta de Derecho de Petición”, mediante el cual se aportado 28 folios útiles sobre el historia del vehículo identificado con placa GNQ75C, la dirección reportada del señor JAIME ENRIQUE CÁCERES al 11 de septiembre de 2021, su historia de ubicaciones registradas, en el sistema RUNT entre otros.
3. Remisión correo electrónico, con asunto “Adjunto respuesta a derecho de petición”.
4. Decreto No. 100-12-050-2023, mediante el cual se nombró al Dr. JORGE VICENTE SÁNCHEZ BARÓN como Secretario de Transito de San Gil.
5. Diligencia de posesión Nro. 7261 correspondiente al Dr. JORGE VICENTE SÁNCHEZ BARÓN.
6. Documentos tenientes a la motocicleta identificada con placas GNQ75C, donde obra RUNT, facturas, improntas, entre otros.

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT

Pese a haber sido notificado en debida forma al correo electrónico Correspondencia.judicial@runt.com.co, mediante oficio 00659 de fecha 03 de agosto de 2023; no se presentó contestación alguna.

VI. CONSIDERACIONES

A. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el art. 86 de la Constitución Nacional, el objetivo fundamental de la Acción de Tutela no es otro que la protección efectiva de los Derechos Constitucionales fundamentales cuando los mismos se han visto vulnerados, o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente señalados por la Ley.

La Carta Política de 1991 consagra importantes garantías constitucionales y mecanismos para hacerlas efectivas, entre los cuales se encuentra la Acción de Tutela (Art. 86) diseñada con el objeto de proteger en forma inmediata los derechos fundamentales.

Así concebida, la acción de tutela es un derecho preferencial que se concreta en una vía judicial, a través de la cual las personas naturales o jurídicas tienen la facultad de exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por sujetos particulares en casos excepcionales.

Pero no obstante, ese carácter instrumental de justicia de tutela, no debe emplearse dada la informalidad y brevedad de los términos procesales a ella aplicables, para que los ciudadanos sometan a consideración por esta vía todo tipo de inquietudes y conflictos, cuando al tenor del Art. 6 del Decreto 2591 de 1991 la acción es de naturaleza subsidiaria, es decir, procede tan solo cuando el titular del derecho violado o amenazado no cuente con otro medio judicial de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así se ha pronunciado la Corte:

“(…) En otros términos, la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente al de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la carta le reconoce.”. (Gaceta Constitucional, Sentencia T-001, Abril 3 de 1992, página 167).



B. COMPETENCIA

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que a través de la acción de tutela, toda persona pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo y procederá sólo en la medida en que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es así como la acción de tutela se encuentra reglamentada en los Decretos Legislativos 2591 de 1.991 y 306 de 1.992, así como por el Auto 124 de 2009, por lo que de acuerdo a esta reglamentación se dio trámite a la presente.

C. LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES

El señor **JAIME ENRIQUE CÁCERES**, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía número 91 071.776, como parte activa, se encuentra legitimado en atención que fuera quien radicó el Derecho de Petición y la acción de tutela en contra de la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, por la presunta vulneración de su esfera más íntima.

Por otro lado, la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)** está legitimada por pasiva como Persona Jurídica de Derecho Público, en la medida que se le atribuye la supuesta vulneración del Derecho Fundamental de Petición deprecado por la parte actora. En el mismo sentido, las vinculadas la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL** y el **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT**, con ocasión de los supuestos facticos expuestos en el libelo genitor.

D. PROBLEMA JURÍDICO

En este punto el debate jurídico debe centrarse en determinar, si la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)** o alguno de los vinculados conculcaron o no el Derecho Fundamental de Petición del señor **JAIME ENRIQUE CACERES**, al presuntamente no haber dado respuesta conforme el núcleo esencial de la garantía invocada, a la solicitud radicada el 30 de junio del año en curso; y, si durante el trámite procesal se conjuró el fenómeno jurídico del hecho superado.

E. ASPECTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL A CONSIDERAR

DERECHO DE PETICIÓN

Para abordar el problema jurídico trazado, es indispensable inicialmente traer a colación los planteamientos que sobre el Derecho Fundamental de Petición ha esbozado suficientemente la Corte Constitucional¹; veamos:

“El derecho de petición y sus elementos estructurales

¹ Sentencia C-007-17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado



14. El derecho de petición está incorporado en el artículo 23 de la Constitución Colombiana de 1991, como aquel que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Además, la disposición indica que el Legislador es quien puede reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este derecho ha sido históricamente consagrado en diversos textos normativos² y, según lo ha reconocido esta Corporación, es una pieza fundamental en el engranaje de nuestro Estado Social de Derecho³. Recientemente la Ley Estatutaria 1755 de 2015 reguló su estructura general y principios. A su vez, está consagrado expresamente en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Derechos del Hombre, en los mismos términos que en el texto constitucional.

Según abundante jurisprudencia de este Tribunal⁴, el derecho de petición es fundamental y tiene aplicación inmediata, sus titulares pueden ser personas mayores o menores de edad, nacionales o extranjeros, y a través de éste se puede acudir ante las autoridades públicas o ante particulares. Así mismo, el derecho de petición tiene un carácter instrumental en tanto a través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos constitucionales, como los de información, participación política, libertad de expresión, salud y seguridad social, entre otros.

15. Así mismo, la Corte ha señalado que su núcleo esencial reside en una resolución pronta y oportuna de la cuestión que se pide, una respuesta de fondo y su notificación, lo anterior no necesariamente implica una respuesta afirmativa a la solicitud. Así pues, se entiende que este derecho está protegido y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración por parte de la autoridad o del particular.

Según se estableció en las sentencias C-818 de 2011⁵ y C-951 de 2014⁶, los referidos elementos del núcleo esencial del derecho de petición pueden describirse de la siguiente manera:

(i) La pronta resolución constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general⁷, 15 días hábiles. Para este Tribunal es claro que el referido lapso es un límite

² En la sentencia C-951 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, se hizo especial referencia a la consagración de este derecho a través de diversos texto normativos, así: “El derecho de petición, objeto de regulación por el proyecto de ley estatutaria bajo control, es un derecho constitucional fundamental cuyo origen se remonta al Bill of Rights aprobado en 1689, catálogo de derechos dentro del cual en el artículo 5º se incorporó el derecho de los súbditos de presentar peticiones ante el rey de Inglaterra. Las primeras constituciones en reconocer este derecho fundamental fueron la de Francia de 1791 y de manera simultánea, la Constitución de los Estados Unidos de América a través de la primera enmienda constitucional efectuada en 1791. // En Colombia, la primera expresión normativa del derecho de petición la encontramos en el artículo 56 la Constitución federal de 1858 (Confederación Granadina), al consagrar: “El derecho de obtener pronta resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos, sobre cualquier asunto de interés general o particular”. Esta disposición fue reproducida en los mismos términos en el catálogo de derechos individuales contemplados en el artículo 15 de la Constitución de 1863 (Estados Unidos de Colombia). Finalmente, el artículo 45 de la Constitución Política de 1886 dispuso que “ Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.” Esta disposición fue objeto de desarrollo legal por virtud del artículo 334 de la Ley 4ª de 1913, del Decreto 2733 de 1959, el Decreto 01 de 1984 y la Ley 57 de 1985.”

³ Esta Corte, en sentencia T-012 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, indicó que: “Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2º. Constitución Política).”

⁴ Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-012 de 1992 M. P. José Gregorio Hernández Galindo; T-377 de 2000 M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-1160A de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-191 de 2002 M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-173 de 2013 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-211 de 2014 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-951 de 2014 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y T-332 de 2015 M. P. Alberto Rojas Ríos.

⁵ M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Por medio de la cual se declaró la inexecutable de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, debido al incumplimiento de la reserva de ley estatutaria.

⁶ M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Por medio de la cual se revisó el proyecto de ley estatutaria sobre derecho de petición.

⁷ Existen algunas excepciones a la regla general. Así por ejemplo en materia pensional los mismos varían. En efecto: “En materia de pensiones, esta Corporación fijó plazos distintos a la regla general de respuesta de las peticiones. Ello sucedió, porque CAJANAL tenía que responder asuntos de gran complejidad y se encontraba en una crisis institucional que le imposibilitaba dar respuesta rápida a las solicitudes pensionales. En la Sentencia SU-975 de 2003, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia, señalando los términos que tiene la administración para dar respuesta a los derechos de petición sobre pensiones, así: “(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y



máximo para la respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno⁸. Mientras ese plazo no expire el derecho no se verá afectado y no habrá lugar al uso de la acción de tutela⁹.

(ii) La respuesta de fondo hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte¹⁰, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”¹¹.

Ahora bien, este Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido. En efecto, la sentencia C-510 de 2004¹² indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la administración”. Así, el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.

(iii) La notificación de la decisión atiende a la necesidad de poner al ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición¹³. La notificación en estos casos, se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado.”¹⁴.

VII. CASO EN CONCRETO

Como génesis, hemos de partir nuestro análisis constitucional, señalando que el señor **JAIME ENRIQUE CACERES**, instauró acción de tutela en contra **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, en búsqueda del amparo del juez de tutela, de las garantías primarias al Derecho Fundamental de Petición, argumentando que no ha recibido respuesta a su solicitud de fecha 30 de junio de 2023, en la cual se solicitó:

“PRIMERO: Me sea allegada copia DIGITAL de cada uno de los trámites realizados por mí ante este organismo de tránsito los cuales deben contar con fecha de realización y aprobación de los mismos.

por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo. (ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; (iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001. Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses, respectivamente, amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social”. C-951 de 2014.

⁸ Sentencia T-814 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-101 de 2014 M.P. Jorge Igancio Pretelt Chaljub.

⁹ Ver sentencias T-481 de 1992, T-997 de 1999, T- 377 de 2000, T-1160A de 2001, T-220 de 1994, T-628 de 2002, T-669 de 2003. Sobre el momento en que una entidad entra en mora para dar una respuesta de fondo pueden consultarse las sentencias T- 467 de 1995, T-414 de 1995 y T-948 de 2003.

¹⁰ Sentencias T-610 de 2008 M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-814 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

¹¹ Sentencia T-610 de 2008 M. P. Rodrigo Escobar Gil.

¹² Sentencia C-510 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis.

¹³ Ver las sentencias T-259 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-814 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.

¹⁴ Sentencia T-149 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.



SEGUNDO: *Se sirvan informarme que dirección tenía registrada ante ustedes para el día 11 de septiembre de 2021.*

TERCERO: *Se sirven enviar DIGITALMENTE el historial de todas las direcciones registradas en su entidad bajo mi número de identificación.*

CUARTO: *Se me allegue copia DIGITAL del formulario o el documento mediante el cual consigné la o las direcciones de la solicitud anterior.*

QUINTO: *Así mismo, solicito se me entregue DIGITALMENTE el registro del historial de direcciones que se encuentra registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT bajo mi número de identificación.*

Lo anterior con ocasión a que ustedes tienen la obligación de reportar cada dirección que yo registre en su entidad al RUNT, sin perjuicio de que yo en algún momento haya modificado mis datos voluntariamente.”.

Es así, que lo pretendido en el libelo genitor, se contrae a la búsqueda del amparo a su esfera primaria, presuntamente transgredida por parte de la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, ante la falta de atención al petitorio de fecha 30 de junio de 2023 y en consecuencia, se le ordene emitir una respuesta de fondo, clara y precisa, conforme lo requerido en el marco de la garantía invocada.

Con base en la premisa expuesta, lo primero que constata esta Célula Jurisdiccional, es que en el caso de marras se tomará como punto de partida el escrito radicado el 30 de junio de 2023, el cual cuenta con cinco (5) puntos diferentes, el cual presuntamente no fue resuelto dentro del término constitucional por la entidad accionada. Circunstancias que dieron origen a la reclamación constitucional en torno a la garantía impetrada, hecho que fue debidamente superado durante el trámite procesal, tal como se procederá a soportar a continuación. Por tanto, la inmediata y eficaz protección de los derechos fundamentales, como objetivos de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, carece de actualidad y pierde su razón de ser.

Se tiene que el Derecho de Petición se encuentra previsto en la Ley 1755 de 2015 “(Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo)”, señalándose en el artículo 14 el término en que deben ser resueltas, esto en el marco del factor de temporalidad que puede llegar a ameritar, elevar contestación de fondo a determinado caso de análisis:

“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”.

En efecto, de las probanzas allegadas durante el trámite procesal, se constató que se elevó un Derecho de Petición, datado el 30 de junio de 2023, radicado de manera electrónica a la dirección transito@sangil.gov.co, correspondiente a la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, al cual se le asignó número de radicado 3210007327, el que presuntamente fue desatendido por la accionada, de donde deviene la activación del aparato jurisdiccional, y en consecuencia, lo pretendido en el libelo genitor que se centró en procurar el amparo primario en los siguientes términos:



“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: ORDENAR a la accionada, **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL**, responder en un término no mayor a 48 horas el derecho de petición presentado el 30 de junio de 2023 que hasta el momento no ha sido contestado”.

La bancada activa al presentar la demanda afirmó que, el requerimiento a la fecha no le había sido resuelto por la entidad a que fueron dirigidos, viendo así menoscabado su esfera esencial, razón por la que, acudió a éste instrumento sumario de orden superior, con el fin de que se le dé contestación de fondo, de manera clara y precisa en el marco de la obligación constitucional.

De todo lo anterior, conforme se soporta en el material probatorio allegado, mediante oficio 2014-2023 de 04 de agosto de 2023 la accionada emitió respuesta de fondo a lo petitionado por el actor, donde se remitió la información tendiente a la dirección reportada en el RUNT para el 11 de septiembre de 2021, adjuntando los soportes requeridos; este fue direccionado al actor al correo electrónico entidades+LD-329700@juzto.co que consta en el escrito petitorio; considerándose así, que se resolvió de fondo lo demandado, de manera clara, precisa y puesto en conocimiento al libelista.

Ahora bien, este fallador no desconoce que el accionante en el escrito tutela refiere que la sustracción presentada por la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, igualmente se originó entre otras cuestiones en virtud del comparendo Nro. 0800100000031236189 de fecha 11 de septiembre de 2019, sin embargo una vez valorado el escrito radicado ante la accionada, no se evidencia solicitud alguna que sobre la citada multa de tránsito, por lo que, bajo el amparo del principio de congruencia constitucional, no existe razón alguna para concluir la vulneración de la esfera fundamental del accionante.

Teniendo en cuenta todo lo precedente y en el entendido que la respuesta al Derecho de Petición, se entiende como superado, ante la contestación de fondo, clara, precisa y debidamente notificada, inclusive cuando la decisión sea contraria a lo petitionado, ha de considerarse que la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-225 de dos mil trece (2013), estableció que la carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando, entre el momento de la interposición de la Acción de Tutela y el momento del fallo, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.

Así mismo la jurisprudencia¹⁵ del máximo Organismo de cierre Constitucional sobre el tema planteado, ha sostenido que

“(…) 27. Esta Corporación ha considerado que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando al momento de proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio origen a la solicitud de amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay carencia de objeto la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir alguna orden dirigida a proteger el derecho fundamental invocado.[52]”¹⁶

En primer lugar, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión eventual ante la Corte Constitucional, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que las circunstancias existentes al momento de interponer la acción se transformaron y por lo tanto la parte accionante ha perdido el interés sobre la satisfacción de su pretensión o ésta no puede

¹⁵ Sentencia T-098 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).

¹⁶ [52] Sobre el particular se pueden ver, entre otras, las sentencias T-1100 de 2004, T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, y T-431 de 2007.



obtenerse, pues la situación en principio informada a través de la tutela, ha cesado.^[53] 17 (...).”

De esta manera, al revisar las probanzas aportadas por la entidad accionada, se concluye que la petición impetrada por parte del señor **JAIME ENRIQUE CACERES**, fue resuelta y debidamente notificada, aunque de manera extemporánea, por parte de la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, esto en el entendido que la acción de amparo fue elevada y notificada 03 de agosto de 2023 y el oficio Nro. 2330006572 mediante el cual se dio contestación fue emitido y notificado el 08 de agosto de 2023; todo lo anterior dentro de los parámetros del núcleo esencial del Derecho de Petición, a pesar de su déficit inicial de respuesta pronta y debidamente notificada. Por ende, ocurre en consecuencia la carencia actual de objeto, y no se otea vulneración en términos de actualidad al derecho fundamental contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, conforme el núcleo esencial dispuesto para éste; conclusión de la que deviene la improcedencia del amparo ante la ausencia de amenaza o vulneración del Derecho Fundamental de Petición por parte de la accionada por el hecho superado; no sin antes prevenir a la Entidad Accionada para que, hacia futuro dé contestación oportuna al mecanismo constitucional como prerrogativa primaria, con la que cuentan los ciudadanos, con miras a procurar sus demás derechos fundamentales, los cuales deberá asegurar conforme el núcleo esencial dispuesto por la carta magna y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.

Así las cosas, el amparo constitucional no está llamado a prosperar y se deberá declarar su improcedencia por carencia actual de objeto por el hecho superado, ante la superación de la vulneración a la garantía Fundamental de Petición del accionante, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Por último, al no advertirse amenaza o vulneración de Derechos Fundamentales por parte de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL** y el **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT**, se procederá a su desvinculación del trámite tutelar.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE SAN GIL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA, de la acción de tutela instaurada por el señor **JAIME ENRIQUE CACERES**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 91'071.776, en contra de la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, por CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por el HECHO SUPERADO respecto del Derecho de Petición, en los términos y por las razones previstas en la parte motiva del presente proveído.

PARÁGRAFO. PREVENIR a la accionada la **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SAN GIL (S)**, para que, hacia futuro, dé contestación oportuna al mecanismo del Derecho de Petición como prerrogativa fundamental, con la que cuentan los ciudadanos, con miras a procurar sus demás derechos fundamentales, los cuales deberá asegurar conforme el núcleo esencial dispuesto por la carta constitucional y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.

¹⁷ [53] Sentencia T-1130 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-170 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).



SEGUNDO. DESVINCULAR de la presente acción de amparo a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL** y el **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT**, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. NOTIFÍQUESE esta providencia a todos los interesados en la forma prevista en los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.

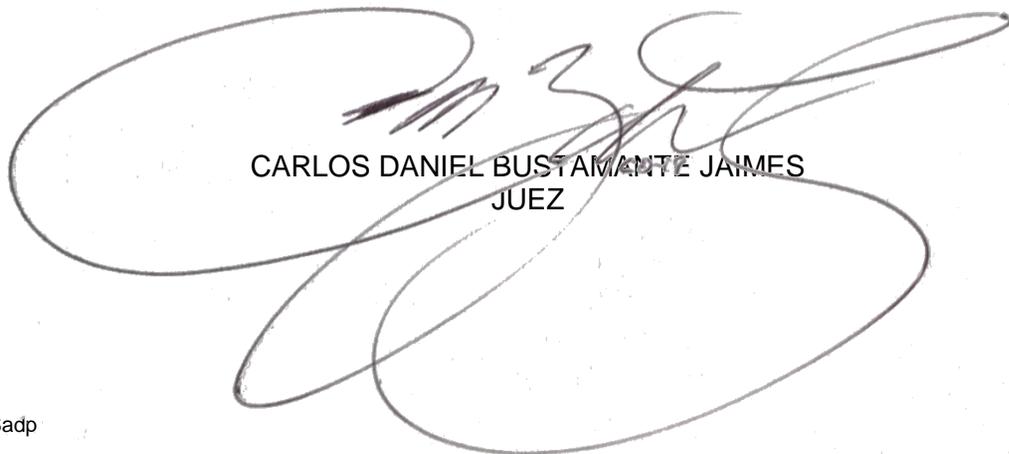
QUINTO. Contra este fallo procede la IMPUGNACIÓN presentada dentro de los tres días siguientes a su notificación.

SEXTO. A costa de la parte interesada expídase fotocopias auténticas de la presente sentencia, de así requerirlo.

SEPTIMO. Si no fuere impugnada y en los términos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura y la Honorable Corte Constitucional, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, como lo ordena el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO. EXCLUIDA DE REVISIÓN, previas las anotaciones de rigor, ARCHÍVENSE las diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS DANIEL BUSTAMANTE JAIMES
JUEZ

CDBJ/Sadp